

# Cuenta Pública 2024: el colapso administrativo del federalismo fiscal mexicano

## -Tercera entrega 2024-

### Introducción

La Cuenta Pública 2024 no es simplemente un ejercicio técnico de revisión contable; es un espejo institucional que refleja el estado real del federalismo fiscal mexicano. Más allá de los números, lo que emerge es una tensión estructural entre la magnitud del gasto público y la capacidad efectiva del Estado para controlarlo, documentarlo y garantizar su correcta ejecución. La fiscalización no solo mide cuánto se gastó, sino qué tan sólido es el andamiaje administrativo que sostiene ese gasto. Y es precisamente en esa arquitectura donde aparecen las grietas.

El análisis por grupos funcionales permite observar que el problema no es homogéneo. Existen áreas donde el control es relativamente más sólido, particularmente en el gasto centralizado del gobierno federal, donde la concentración administrativa facilita la supervisión y la trazabilidad documental. Sin embargo, incluso en estos espacios se identifican fricciones administrativas que revelan debilidades en procesos internos, mecanismos de contratación y cumplimiento normativo. Estas fallas, aunque acotadas, evidencian que la disciplina administrativa nunca puede darse por garantizada, ni siquiera en estructuras consolidadas.

En el ámbito del desarrollo social, la complejidad adopta otra forma. Aquí el desafío no radica únicamente en el control institucional, sino en la escala operativa. Salud, educación, seguridad social y programas de atención masiva a la población implican miles de transacciones, múltiples niveles de ejecución y una enorme dispersión territorial. El gasto social, por su naturaleza expansiva, exige una coordinación administrativa casi quirúrgica. Cuando los sistemas de control no logran acompañar esa magnitud, aparecen inconsistencias, debilidades documentales y procesos de comprobación incompletos. No necesariamente se trata de un problema de intención política, sino de capacidad operativa y homogeneidad institucional.

El grupo funcional de desarrollo económico introduce un componente adicional: el riesgo productivo. Aquí se concentran proyectos estratégicos, infraestructura, energía y programas vinculados al crecimiento. La inversión pública no solo debe ejecutarse correctamente desde el punto de vista contable, sino también técnico y estratégico. La mala planeación, la supervisión insuficiente o la débil documentación pueden transformar una política de impulso económico en una fuente de ineficiencia estructural. En este ámbito, el costo del desorden no es solo administrativo; es un costo para el crecimiento y la competitividad nacional.

Sin embargo, el núcleo del problema se encuentra en el gasto federalizado. La descentralización del gasto, concebida como un mecanismo para acercar los recursos a las necesidades locales, enfrenta su mayor desafío cuando las capacidades administrativas de

los gobiernos subnacionales son heterogéneas. La transferencia de recursos sin una estructura de control homogénea amplifica la fragmentación de la rendición de cuentas. El federalismo fiscal se convierte entonces en un sistema donde el poder presupuestario se distribuye, pero la responsabilidad se diluye. La cadena que va de la asignación federal a la ejecución local y a la comprobación final se vuelve el punto más vulnerable del sistema.

El problema de fondo no es la magnitud del presupuesto ni la ambición de las políticas públicas. El problema es la consistencia institucional que debe acompañarlas. Un Estado puede expandir su gasto, ampliar programas sociales y fortalecer proyectos estratégicos, pero si su capacidad administrativa no crece al mismo ritmo, el sistema comienza a mostrar síntomas de fragilidad. La Cuenta Pública 2024 revela precisamente esa tensión: un federalismo fiscal que ha ampliado su alcance presupuestal sin consolidar plenamente su disciplina operativa.

Así, más que un informe técnico, este análisis constituye una radiografía política del modelo fiscal mexicano. La descentralización ha fortalecido el alcance territorial del Estado, pero también ha expuesto la desigualdad en capacidades administrativas. La eficiencia económica no depende únicamente de la cantidad de recursos asignados, sino de la calidad del control institucional que garantiza su correcta aplicación. Cuando esa calidad es desigual, el sistema completo se aproxima a un punto crítico.

En este contexto, la pregunta central no es cuánto se gasta, sino cuánto se puede demostrar que se gastó correctamente y con resultados verificables. Esa es la verdadera medida de la fortaleza del federalismo fiscal mexicano.

## **Cuenta Pública 2024: el federalismo fiscal mexicano al borde del colapso administrativo**

La Cuenta Pública 2024 ofrece una radiografía precisa del funcionamiento real del aparato fiscal mexicano al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El universo auditado asciende a 22.89 billones de pesos, de los cuales la Auditoría Superior de la Federación revisó 12.14 billones, equivalentes al 53.03% del total ejercido. De esta fiscalización se derivó un monto por aclarar de 65,169 millones de pesos, cifra que representa 0.28% del universo total y 0.54% de la muestra auditada. A primera vista, estos porcentajes podrían interpretarse como relativamente contenidos; sin embargo, una lectura agregada oculta el verdadero problema. El riesgo no está en el promedio nacional, sino en su concentración interna.

El núcleo del diagnóstico se encuentra en el Gasto Federalizado, que concentra 59,363 millones de pesos por aclarar, es decir, aproximadamente el 91% del total nacional observado. Este bloque tiene un universo de 2.76 billones de pesos y una muestra auditada de 2.51 billones, lo que implica una cobertura superior al 90%. No obstante, el monto por aclarar equivale al 2.14% del universo y al 2.36% de la muestra, proporciones muy superiores a las registradas en los demás grupos funcionales. Esta diferencia no es estadísticamente trivial; revela una fragilidad estructural en el diseño operativo del federalismo fiscal mexicano.

Durante el sexenio, el Ejecutivo federal consolidó un modelo de fuerte centralización política acompañado de una expansión territorial del gasto. Las transferencias a entidades federativas y municipios, a través de aportaciones, participaciones y fondos específicos, mantuvieron e incluso ampliaron su peso dentro del presupuesto. Sin embargo, la evidencia fiscalizadora sugiere que esa expansión no fue acompañada por un fortalecimiento homogéneo de capacidades administrativas subnacionales. Los 35,647 millones de pesos observados en Aportaciones y Transferencias Generales, junto con los 15,680 millones en Participaciones Federales, muestran que la mayor fricción no se encuentra en la decisión de asignar recursos, sino en la capacidad de ejecutarlos y documentarlos adecuadamente en el territorio. Cuando la cadena que va de la transferencia federal a la comprobación final depende de miles de unidades ejecutoras con capacidades desiguales, el riesgo administrativo se multiplica.

En el ámbito de Desarrollo Económico, el monto por aclarar asciende a 3,723 millones de pesos sobre un universo de 1.04 billones, lo que equivale al 0.36% del total del bloque y al 0.58% de la muestra auditada. Aunque proporcionalmente menor que el federalizado, aquí el riesgo es cualitativamente más delicado porque involucra sectores estratégicos para el crecimiento nacional. PEMEX concentra 1,762 millones de pesos por aclarar, mientras que Infraestructura, Comunicaciones y Transportes acumula 1,215 millones. Durante el sexenio se privilegió una narrativa de soberanía energética y recuperación del papel del Estado en la inversión estratégica. No obstante, la fiscalización evidencia que la expansión acelerada de proyectos emblemáticos tensionó la capacidad técnica de control. La inversión pública no solo debe ejecutarse; debe planearse, documentarse y supervisarse con rigor. Cuando el impulso político avanza más rápido que la consolidación administrativa, la inversión deja de ser instrumento de productividad y se convierte en fuente de fricción institucional.

El bloque de Desarrollo Social, con un universo de 3.86 billones de pesos y un monto por aclarar de 1,409 millones, muestra un comportamiento distinto. Proporcionalmente, el riesgo es bajo frente a la magnitud del gasto; sin embargo, sectores como Salud (585 millones) y Educación Pública (231 millones) evidencian tensiones operativas en áreas sensibles. El sexenio estuvo marcado por reestructuraciones profundas en el sistema de salud y por la expansión de programas sociales masivos. Estos procesos implicaron cambios institucionales rápidos, eliminación o transformación de estructuras intermedias y centralización de decisiones operativas. La evidencia sugiere que la transición administrativa generó inconsistencias en comprobación y documentación. No se trata necesariamente de desvíos masivos, sino de fricciones derivadas de una reingeniería institucional acelerada.

En contraste, el Gasto Gobierno, con 673 millones de pesos por aclarar sobre un universo de 378 mil millones, representa apenas 0.18% del total del bloque. Este dato confirma una hipótesis relevante: donde el gasto permanece bajo control directo de estructuras federales consolidadas, la trazabilidad mejora y el riesgo proporcional disminuye. Es decir, la centralización política no genera automáticamente desorden; el problema surge cuando la descentralización operativa no está acompañada por estándares homogéneos de control.

El diagnóstico general no apunta a un colapso financiero inmediato. Los 65 mil millones de pesos por aclarar no comprometen la estabilidad macroeconómica ni representan un porcentaje significativo del PIB nacional. El problema es más profundo y más delicado: se trata de una erosión institucional progresiva. El federalismo fiscal mexicano, bajo el modelo operativo del sexenio, expandió su alcance presupuestario sin consolidar plenamente su disciplina administrativa territorial. El resultado es una concentración del riesgo en el eslabón más débil de la cadena: la ejecución subnacional.

La Cuenta Pública 2024 no describe un Estado sin recursos; describe un Estado cuya capacidad de control no creció al mismo ritmo que su ambición presupuestaria. Cuando el presupuesto se expande, pero la arquitectura administrativa permanece fragmentada y heterogénea, el sistema se aproxima a un punto crítico. El riesgo no es explosivo ni inmediato; es acumulativo. Cada peso no plenamente comprobado erosiona gradualmente la confianza institucional, y en política fiscal la confianza es tan determinante como la solvencia. En síntesis, el modelo presupuestario del sexenio priorizó expansión territorial, proyectos estratégicos y centralización política del poder, pero dejó expuesta la consistencia técnica del federalismo fiscal. La fragilidad no es macroeconómica; es administrativa. Y cuando la administración se debilita, el federalismo fiscal se acerca peligrosamente al desorden estructural.

**Tabla 1. Tercera entrega de la Cuenta Pública 2024: Grupos Funcionales y Sectores Ordenados por Mayor Monto por Aclarar**

Grupo Funcional	Sector	Auditorías	Universo (miles de millones de pesos)	Monto por Aclarar (miles de millones de pesos)
<b>GASTO FEDERALIZADO</b>		<b>1,846</b>	<b>2,767.64</b>	<b>59.36</b>
	Aportaciones Federales, Participaciones y Otros	1,069	60.99	35.65
	Participaciones Federales	98	1,244.48	15.68
	Educación (Federalizada)	328	826.28	3.99
	Salud (Federalizada)	36	311.57	1.59
	Infraestructura Física y Saneamiento Financiero	33	63.85	1.39
	Infraestructura Social	93	118.23	0.67
	Protección Social	27	0.80	0.28
	Seguridad	99	127.13	0.08
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>175</b>	<b>1,047.50</b>	<b>3.72</b>
	Petróleos Mexicanos (PEMEX)	33	343.73	1.76
	Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	29	82.55	1.22
	Marina	14	78.23	0.27
	Humanidades, Ciencia e Innovación	10	19.78	0.27
	CFE	20	31.18	0.07
	Energía	6	1.61	0.0001304
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>154</b>	<b>3,865.25</b>	<b>1.41</b>
	Salud	21	44.51	0.59
	Educación Pública	20	192.75	0.23
	Medio Ambiente y Recursos Naturales	15	82.46	0.23
	ISSSTE	21	433.37	0.12
	Agricultura y Desarrollo Rural	2	10.61	0.06
	IMSS	17	1,038.81	0.05
	Cultura	8	23.34	0.03
<b>GASTO GOBIERNO</b>		<b>84</b>	<b>378.60</b>	<b>0.67</b>
	Poder Judicial	3	14.22	0.28
	Marina	10	17.28	0.23

Grupo Funcional	Sector	Auditorías	Universo (miles de millones de pesos)	Monto por Aclarar (miles de millones de pesos)
	Gobernación	9	5.68	0.08
	INE	4	7.13	0.07
	Seguridad y Protección Ciudadana	6	36.88	0.00
<b>INGRESO / DEUDA</b>		<b>3</b>	<b>14,793.08</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL NACIONAL</b>		<b>2,264</b>	<b>22,898.08</b>	<b>65.17</b>

Fuente: elaboración propia con datos de la Cuenta Pública 2024, tercera entrega

## Conclusión

### *Disciplina fiscal, federalismo responsable y la deuda institucional del sexenio*

La Cuenta Pública 2024 deja una lección clara: el problema del Estado mexicano no es la falta de recursos, sino la falta de disciplina institucional homogénea en su ejercicio. Los 65,169 millones de pesos por aclarar, concentrados en un 91% en el gasto federalizado, no representan un colapso financiero, pero sí evidencian un debilitamiento estructural en la arquitectura administrativa del federalismo fiscal

Desde una visión de responsabilidad fiscal como la que históricamente ha defendido el PAN, el presupuesto no es un instrumento político de expansión narrativa, sino una herramienta técnica que exige planeación, transparencia, trazabilidad y evaluación de resultados. El gasto público no se legitima por su magnitud ni por su discurso social; se legitima por su comprobación y por su impacto verificable en la prosperidad.

El sexenio apostó por una expansión territorial del gasto bajo un modelo de fuerte centralización política. Se concentró poder en el Ejecutivo, se desmantelaron contrapesos técnicos, se redujeron estructuras administrativas bajo el argumento de austeridad y se impulsaron proyectos estratégicos con fuerte carga simbólica. Sin embargo, la fiscalización revela que la expansión presupuestaria no fue acompañada por un fortalecimiento equivalente en capacidades técnicas subnacionales ni en controles administrativos sectoriales.

El federalismo fiscal responsable exige corresponsabilidad: quien recibe recursos debe tener la capacidad técnica de administrarlos y la obligación estricta de documentarlos. Cuando más de 59 mil millones de pesos por aclarar se concentran en transferencias territoriales, el problema no es ideológico, es institucional. Se debilitó la profesionalización administrativa local, no se homologaron sistemas contables, no se fortalecieron órganos técnicos estatales y municipales, y el control ex post sustituyó a la prevención técnica ex ante.

En Desarrollo Económico, los montos observados en sectores estratégicos como PEMEX e infraestructura reflejan otra tensión del modelo: la politización de la inversión pública. Un enfoque responsable entiende que los megaproyectos no se justifican por su narrativa soberanista, sino por su rentabilidad social, su evaluación costo-beneficio y su

ejecución técnicamente impecable. Cuando la inversión pública se convierte en símbolo político, el riesgo administrativo aumenta y la disciplina técnica se relaja.

Desde una óptica de política pública responsable, el verdadero riesgo no es el porcentaje global relativamente bajo del monto por aclarar, sino la concentración sistemática del desorden en el eslabón territorial del gasto. La prosperidad no se construye solo distribuyendo recursos; se construye garantizando que cada peso cumpla su objetivo con eficiencia y transparencia. La rendición de cuentas no es obstáculo político, es condición de legitimidad democrática.

El PAN ha sostenido históricamente que el crecimiento económico, la estabilidad fiscal y la fortaleza institucional son pilares inseparables. La Cuenta Pública 2024 demuestra que cuando el discurso político prioriza expansión sin consolidar disciplina, el resultado es fragilidad administrativa acumulativa. No hay prosperidad sostenible sin reglas claras, sin contrapesos técnicos y sin profesionalización del servicio público.

El diagnóstico final es contundente: el sexenio dejó un Estado con mayor presencia presupuestaria, pero con debilidades crecientes en su engranaje administrativo territorial. La solución no pasa por recortar indiscriminadamente ni por expandir sin límite, sino por reconstruir la disciplina institucional del federalismo fiscal. Se requiere:

- Fortalecer capacidades técnicas estatales y municipales.
- Reinstalar estándares homogéneos de control.
- Blindar la inversión pública con evaluaciones rigurosas.
- Profesionalizar la administración pública.
- Restablecer contrapesos técnicos independientes.

La Cuenta Pública 2024 no condena al país a una crisis inmediata, pero sí advierte que la prosperidad futura depende de reconstruir la arquitectura institucional que sostiene el gasto. Sin disciplina, el presupuesto se convierte en herramienta política; con disciplina, se convierte en motor de desarrollo.